



**CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**



Iniciativa de Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Presentada por el Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**Recibida en Sesión de fecha 1 de enero de 2012
Informe en correspondencia el día 20 de Enero de 2012.**

Turnada a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Lectura del Dictamen: 21 de Febrero de 2012.

Decreto No. 12

Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado: P.O. 28 / 8 de Abril de 2012

INICIATIVA DE LEY PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SUSCRITA POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ.

El suscrito Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en los artículos 59 fracción II y 82, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 6 y 9, Apartado A, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, 144 fracción II y 145 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano del Estado de Coahuila de Zaragoza, someto a la consideración de este Honorable Congreso la presente iniciativa de Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Coahuila de Zaragoza, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente, México atraviesa por la mayor crisis de seguridad en su historia, la cual se ha manifestado de diversas maneras. Por ello, deben implementarse políticas públicas que trasciendan las fronteras de la seguridad pública e impacten de manera directa la vida de los ciudadanos, para contribuir a reducir los índices de violencia, delincuencia y victimización.

La estrategia que en los últimos años ha ocupado espacios relevantes en el contexto internacional para mejorar las condiciones de seguridad en distintas naciones, es la prevención social de la violencia y la delincuencia.

Desde 1989, la Declaración de la Conferencia Norteamericana y Europea sobre Seguridad Urbana y Prevención del Delito emitió una serie de recomendaciones a los gobiernos para potenciar el trabajo comunitario, la participación ciudadana y la coordinación interinstitucional como condición para la prevención del delito.

A partir de dichas recomendaciones, diversos países han realizado esfuerzos para crear organismos de cooperación internacional y promover el intercambio de información, tecnología y buenas prácticas para lograr ciudades más seguras.

En 2005 la Organización de las Naciones Unidas reconoció que “estrategias de prevención del delito amplias y eficaces pueden reducir significativamente la delincuencia y la victimización”. En ellas se recomienda abordar las causas profundas y los factores de riesgo de la delincuencia y la victimización.

En el estudio denominado *Mapa de la Violencia: Los jóvenes de América Latina*, elaborado en 2008, se revelan datos alarmantes: Los jóvenes de entre 15 y 24 años corren más peligro de ser víctima de homicidio en países latinoamericanos que en cualquier otro lugar del mundo. Los datos demuestran que en América Latina por cada cien mil habitantes, 36.6 jóvenes menores de 24 años son asesinados, en comparación con 16.1 en África, 12 en América del Norte y 1.2 en Europa. México ocupa el lugar 18 en tasas de homicidio totales y el número 19 en homicidios juveniles.

Por cuanto hace al contexto nacional, la ONU, ubica a México en el lugar número 16 de entre 115 naciones con mayor índice violencia y delincuencia. A principios de 2009, la INTERPOL y la DEA clasificaron a México como un país altamente inseguro, al situarlo en el lugar 5 de entre 107 países.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública permitió conocer que en 2010 existieron 17 millones 847 mil 550 víctimas, lo que significa que el 15.93% de la población fue víctima de algún delito durante ese año.

De acuerdo con el citado estudio, una parte de las víctimas sufrieron más de un delito, de manera que durante 2010, se generaron un total de 22 millones 714 mil 967 delitos asociados a las víctimas, lo que representa una tasa de 1.3 delitos por víctima.

Del total de víctimas, 52.9% fueron hombres y el 47.1% fueron mujeres y los delitos más frecuentes fueron: Robo o asalto en la calle o en el transporte público con 24.2% de las víctimas (más de 4 millones), Extorsión con 23.7% (más de 4 millones), Robo total o parcial de vehículos el 12.1% (más de 2 millones), entre otros.

A ello se suma que entre 2006 y 2011, 50 mil 490 personas han perdido la vida en manos del crimen organizado; ello, sin considerar que las estadísticas únicamente se refieren a delitos denunciados, pues la mayoría de la población prefiere abstenerse de denunciar ante los trámites burocráticos a los que deben enfrentarse, así como a la corrupción y la impunidad.

En Coahuila el número de delitos del fuero común se ha incrementado considerablemente, pasando de 26 mil 928 delitos en 2006 a 49 mil 800 en 2009, es decir, en tan sólo 3 años, la incidencia delictiva en el estado se incrementó en un 84%.

De 2006 a 2010, los delitos sexuales se incrementaron en un 25%, los delitos patrimoniales en un 115%, el robo con violencia en 140% y los delitos contra la vida y la seguridad en un 79%.

Tan sólo en 2010, se cometieron en Coahuila 8 mil 253 delitos contra la vida y la seguridad de las personas, de los cuales el 65.66% son lesiones intencionales y sólo el 4.93% son homicidios.

En el mismo año, se cometieron 34,720 delitos patrimoniales, de los cuales el 10.55% fueron robos con violencia y el 57.61% fueron robos sin violencia.

Debe destacarse, que gracias a la política en materia de seguridad implementada por el Gobierno del Estado, los delitos del fuero común no se han incrementado en los últimos dos años, toda vez que en promedio, en 2010 y lo que va de 2011 se cometieron 8.2% menos delitos con relación a 2009.

Sin embargo, es indispensable contar con las herramientas necesarias para implementar una cultura de la prevención que permita incidir en las causas que favorecen la comisión de delitos y de conductas contrarias a la ley, para reducir los índices de violencia, delincuencia y victimización.

Ello es así, toda vez que la mayor parte de conductas contrarias a la ley pueden prevenirse mediante programas integrales que incidan en las condiciones de vida de la población y en las causas que favorecen la comisión de estas conductas, que generalmente obedecen a circunstancias multifactoriales.

La Conferencia Nacional de Gobernadores ha dado seguimiento al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, signado el 21 de agosto de 2008, logrando un avance de cerca del 90% de los acuerdos en todas las entidades de la República; sin embargo, en el seno de ese organismo se ha reconocido que hace falta la implementación de una política de prevención del delito para abordar de manera integral el problema de la violencia y la delincuencia.

Por su parte, el Poder Legislativo Federal ha impulsado reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la creación de nuevos ordenamientos como la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y la Nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual permitió el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad

Pública mediante la creación de tres Centros Nacionales, entre ellos el de prevención del delito.

De igual manera, en noviembre de 2011 fue aprobada en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados la Minuta que contiene la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, presentada por la Diputada Federal Alma Carolina Viggiano Austria, la cual contiene las directrices generales para la implementación de una política de prevención social de la violencia y la delincuencia en todas las entidades de la República Mexicana.

Pese a estos esfuerzos, ninguna estrategia de prevención social podrá implementarse de manera eficaz si al interior de cada entidad federativa no existe el marco normativo necesario para garantizar la articulación de los programas públicos existentes, así como la coordinación entre los municipios, el estado y la sociedad civil organizada, para reorientar los esfuerzos que actualmente se desarrollan en materia de prevención, pero que se encuentran desarticulados.

Por tal motivo, Coahuila requiere de un marco normativo que le permita sumar los esfuerzos ya existentes y orientarlos a la prevención social de la violencia y la delincuencia; donde los municipios, las dependencias estatales y la propia ciudadanía jueguen un papel importante para reducir los índices de violencia, delincuencia y victimización, desde la esfera básica de la organización social que es la familia.

Esta iniciativa define a la prevención social de la violencia y la delincuencia como el conjunto de políticas, estrategias e intervenciones orientadas a reducir el riesgo de que se produzcan delitos e infracciones administrativas, los efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia, así como a intervenir para influir en sus múltiples causas y manifestaciones.

El Capítulo Primero, contiene las disposiciones que regirán la aplicación de la ley, así como los principios generales bajo los cuales se desarrollarán los programas en materia de prevención, tales como respeto irrestricto a los derechos humanos,

integralidad, intersectorialidad y transversalidad, trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad y proximidad.

En el Capítulo Segundo se describen los ámbitos de intervención de la prevención social de la violencia y la delincuencia, los cuales son: Social, Comunitario, Situacional y Psicosocial.

El Capítulo Tercero establece las facultades que el Consejo Estatal de Seguridad Pública, tendrá para la coordinación de la política estatal en materia de prevención de la violencia y la delincuencia.

De igual manera, se crea el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual será un órgano interno del Sistema de Seguridad Pública del Estado, que además de las atribuciones y deberes que le impone la ley del sistema, será el responsable de implementar, supervisar y evaluar la política implementada en el estado y los municipios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.

Finalmente, se establece que para el diseño e implementación del Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el Consejo Estatal de Seguridad Pública deberá convocar a sus sesiones, con voz y voto, a los titulares de las dependencias estatales cuyas atribuciones y facultades inciden directa o indirectamente en la prevención social, tales como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Humano, etcétera.

En el Capítulo Quinto se fijan las bases para el diseño y ejecución del Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual se implementará coordinadamente entre las autoridades estatales, municipales e instancias de la sociedad civil y deberá contribuir a proveer a las personas protección en las áreas de libertad, seguridad y justicia, con base en objetivos precisos, claros y medibles, a través de:

- a) La incorporación de la prevención social como elemento central de las prioridades en la calidad de vida de las personas;

- b) El diagnóstico de seguridad a través del análisis sistemático de los problemas de la delincuencia, sus causas, los factores de riesgo y las consecuencias;
- c) Los diagnósticos participativos;
- d) Los ámbitos y grupos prioritarios que deben ser atendidos;
- e) El fomento de la capacitación de los servidores públicos cuyas atribuciones se encuentren relacionadas con la materia objeto de la presente ley, lo cual incluirá la realización de seminarios, estudios e investigaciones o programas de formación entre otros, para asegurar que sus intervenciones sean apropiadas, eficientes, eficaces y sostenibles;
- f) La movilización y construcción de una serie de acciones interinstitucionales que tengan capacidad para abordar las causas y que incluyan a la sociedad civil;
- g) El desarrollo de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia, y
- h) El monitoreo y evaluación continuos.

De igual manera, se incorpora la obligación del Centro Estatal de evaluar las acciones realizadas para ejecutar el programa anual y los resultados del año anterior, ello con la finalidad de dotar de transparencia a las acciones emprendidas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.

En síntesis, esta ley dotará al Estado de Coahuila de Zaragoza de una nueva herramienta para atender el problema de inseguridad que actualmente aqueja a toda la República Mexicana, mediante la implementación de una política pública transversal que no requiere de inversión pública, sino de articular los programas ya existentes para incidir en las causas que favorecen la comisión de delitos, los actos violentos e incluso las infracciones administrativas.

Por lo expuesto, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 59 fracción II y 82 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Coahuila; 6 y 9, Apartado A, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, 144 fracción II y 145 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito someter a

este Honorable Congreso para su estudio, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa de:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

**CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 1. Esta ley es de orden público, interés social y de observancia obligatoria en el Estado de Coahuila de Zaragoza, y tiene por objeto establecer las bases de planeación, coordinación e implementación entre el estado y los municipios, así como la participación de los sectores privado y social, para la prevención social de la violencia, la delincuencia y la victimización.

Artículo 2. La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas, estrategias e intervenciones orientadas a reducir el riesgo de que se produzcan delitos e infracciones administrativas, los efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia, así como a intervenir para influir en sus múltiples causas y manifestaciones.

El estado, en coordinación con los municipios desarrollará políticas e intervenciones integrales a través de medidas de cooperación permanentes, estructuradas y concretas, mismas que se coordinarán con las estrategias para el desarrollo social, económico, político y cultural.

Artículo 3. La aplicación de la presente ley corresponde al Titular del Ejecutivo del Estado, a través de las dependencias y entidades que tengan por objeto llevar a cabo acciones relacionadas con el objeto de la presente ley; y a las autoridades municipales que para tal efecto sean creadas o facultadas.

Artículo 4. La planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones se realizará en los diversos ámbitos de

competencia, por conducto de las dependencias y entidades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta ley, debiendo observar como mínimo los siguientes principios:

I. Respeto irrestricto a los derechos humanos;

II. Integralidad. El estado, desarrollará políticas públicas integrales eficaces para la prevención de la violencia y la delincuencia, fomentando la participación ciudadana y comunitaria;

III. Intersectorialidad y transversalidad. Consiste en la articulación, homologación y complementariedad de las políticas públicas, programas y acciones de los distintos órdenes de gobierno, incluidas las de justicia, seguridad pública, desarrollo social, economía, cultura y derechos humanos, con atención particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las mujeres, así como las y los jóvenes en situación de vulnerabilidad;

IV. Trabajo conjunto. Comprende el desarrollo de acciones conjuntas entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, así como de los diferentes sectores y grupos de la sociedad civil, organizada y no organizada, así como de la comunidad académica de manera solidaria, para que contribuyan a la prevención social de la violencia y la delincuencia y al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad;

V. Continuidad de las políticas públicas. Con el fin de garantizar los cambios socioculturales en el mediano y largo plazos, a través del fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, asignación de presupuesto, el monitoreo y la evaluación;

VI. Interdisciplinariedad. Consiste en el diseño de políticas públicas tomando en cuenta conocimientos y herramientas de distintas disciplinas y experiencias nacionales e internacionales;

VII. Diversidad. Consiste en considerar las necesidades y circunstancias específicas determinadas por el contexto local territorial, el género, la procedencia étnica,

sociocultural, religiosa, así como las necesidades de grupos vulnerables o en riesgo, mediante la atención integral diferenciada y acciones afirmativas;

VIII. Proximidad. Comprende la resolución pacífica de conflictos, con estrategias claras, coherentes y estables, de respeto a los derechos humanos, la promoción de la cultura de la paz y sobre la base del trabajo social comunitario, así como del contacto permanente con los actores sociales y comunitarios; y

IX. Transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 5. Para efectos de la presente ley se entenderá por:

- I. **Centro Estatal:** El Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;
- II. **Consejo Estatal:** El Consejo Estatal de Seguridad Pública;
- III. **Ley:** La Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;
- IV. **Ley Estatal:** La Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado.
- V. **Participación ciudadana y comunitaria:** La participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad civil, organizada y no organizada, así como de la comunidad académica;
- VI. **Programa Estatal:** El Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;
- VII. **Violencia:** El uso deliberado del poder o de la fuerza física, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Quedan incluidas las diversas manifestaciones que tiene la violencia como la de género, la juvenil, la delictiva, la institucional y la social, entre otras.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

Artículo 6. La prevención social de la violencia y la delincuencia incluye los siguientes ámbitos de intervención:

- I. Social;

- II. Comunitario;
- III. Situacional; y
- IV. Psicosocial.

Artículo 7. La prevención en el ámbito social implica la reducción de los factores y condiciones sociales, que fomentan el desarrollo de conductas violentas y delictivas, mediante:

- I. Programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda y empleo;
- II. La promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión;
- III. El fomento de la solución pacífica de conflictos;
- IV. El diseño e instrumentación de estrategias de educación y sensibilización de la población para promover la cultura de legalidad y tolerancia respetando al mismo tiempo las diversas identidades culturales. Incluye tanto programas generales como aquellos enfocados en la juventud, las familias y las comunidades en altas condiciones de vulnerabilidad; y
- V. Programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y generen oportunidades de desarrollo especialmente para los grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad o afectación.

Artículo 8. La prevención en el ámbito comunitario comprende la participación de la comunidad en acciones tendientes a establecer las prioridades de la prevención, mediante diagnósticos participativos, el mejoramiento de las condiciones de seguridad de su entorno y el desarrollo de prácticas que fomenten una cultura de prevención, autoprotección, denuncia ciudadana y de utilización de los mecanismos alternativos de solución de controversias.

Comprende, asimismo:

- I. El mejoramiento del acceso de la comunidad a los servicios básicos;
- II. Involucrar a las mujeres, las y los jóvenes, las niñas y los niños, y a los grupos marginados en la toma de decisiones;

- III. Fomentar el desarrollo comunitario, social y la cohesión entre las comunidades frente a problemas locales;
- IV. La participación de la comunidad en la implementación de planes y programas, su evaluación y sostenibilidad; y
- V. El fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 9. La prevención en el ámbito situacional consiste en modificar el entorno para eliminar las condiciones que facilitan la victimización y la percepción objetiva y subjetiva de la inseguridad, mediante:

- I. El mejoramiento del desarrollo urbano, ambiental y el diseño industrial, incluidos los sistemas de transporte público, los sistemas de vigilancia a través de circuito cerrado, y el uso de sistemas computacionales, entre otros;
- II. La utilización de métodos apropiados de vigilancia en que se respete el derecho a la intimidad y a la privacidad;
- III. Medidas administrativas encaminadas a disminuir la disponibilidad de medios comisivos o facilitadores de violencia; y
- IV. La aplicación de estrategias para prevenir la repetición de casos de victimización.

Artículo 10. La prevención en el ámbito psicosocial tiene como objetivo incidir en las motivaciones individuales hacia la violencia o las condiciones criminógenas con referencia a los individuos, la familia, la escuela y la comunidad, que incluye como mínimo lo siguiente:

- I. Impulsar el diseño y aplicación de programas formativos en habilidades para la vida, dirigidos principalmente a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad;
- II. La inclusión de la prevención de la violencia, la delincuencia y de las adicciones, en las políticas públicas estatales y municipales en materia de educación; y
- III. El fortalecimiento de las capacidades institucionales que asegure la sostenibilidad de los programas de prevención social.

Artículo 11. El acceso a la justicia y la atención integral a las víctimas de la violencia o de la delincuencia, debe considerar la asistencia, protección, reparación del daño y prevención de la doble victimización, a través de:

- I. La atención inmediata y efectiva a víctimas de delitos, en términos del impacto emocional y el proceso legal, velando por sus derechos y su seguridad en forma prioritaria;
- II. La atención psicológica especializada, inmediata y subsecuente realizada por profesionales, considerando diferentes modalidades terapéuticas;
- III. La atención específica al impacto en grupos especialmente vulnerables a desarrollar problemas derivados de delitos violentos;
- IV. Brindar respuesta a las peticiones o solicitudes de intervención presentadas por las víctimas de la violencia y la delincuencia, a través de los mecanismos creados para ese fin; y
- V. La reparación integral del daño que incluye el reconocimiento público, la reparación del daño moral y material y las garantías de no repetición.

CAPÍTULO TERCERO DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN

Sección Primera Del Consejo Estatal de Seguridad Pública

Artículo 12. El Consejo Estatal de Seguridad Pública, será la máxima instancia para la coordinación y definición de la política pública en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.

Artículo 13. Las atribuciones del Consejo Estatal en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia son:

- I. Elaborar y aprobar en coordinación el Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y todos aquellos vinculados con esta materia;
- II. Constituir el Subsistema Estatal de Prevención Social de la Delincuencia, para definir estrategias de colaboración interinstitucional que faciliten la

cooperación, contactos e intercambio de información y experiencias entre el estado y los municipios; así como con organizaciones de la sociedad civil, centros educativos o de investigación, o cualquier otro grupo de expertos o redes especializadas en prevención;

- III. Establecer los lineamientos para recabar, analizar y compartir la información existente sobre la prevención social de la violencia y la delincuencia, análisis de las mejores prácticas, su evaluación, así como su evolución, entre los integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con el objeto de contribuir a la toma de decisiones;
- IV. Informar a la sociedad anualmente sobre sus actividades a través de los órganos competentes, e indicar los ámbitos de acción prioritarios de su programa de trabajo para el año siguiente;
- V. Promover la generación de indicadores estandarizados para los integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública en materia de prevención de la violencia y la delincuencia, los que al menos serán desagregados por edad, sexo, ubicación geográfica y pertenencia étnica cuando se refieran a personas; y
- VI. Las demás establecidas en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Artículo 14. Para la elaboración, aprobación e implementación del Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el Consejo Estatal, en términos de lo dispuesto en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, convocará para integrar el Subsistema de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a los titulares de:

- a) La Secretaría de Desarrollo Social;
- b) La Secretaría de Educación;
- c) La Secretaría de Cultura;
- d) La Secretaría de Salud;
- e) El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;
- f) El Instituto Coahuilense de las Mujeres;
- g) El Instituto Coahuilense de la Juventud;
- h) El Instituto Coahuilense de los Adultos Mayores; y
- i) Las demás que el Consejo Estatal considere pertinente.

Sección Segunda
Del Secretariado Ejecutivo

Artículo 15. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Proponer al Consejo Estatal de Seguridad Pública, políticas públicas, programas y acciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia;
- II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del propio Consejo Estatal y de su Presidente sobre la materia;
- III. Difundir la información estadística en materia de incidencia delictiva y de prevención social de la violencia y la delincuencia; y
- IV. Todas aquellas atribuciones conferidas al Secretariado Ejecutivo en la Ley General del Sistema de Seguridad Pública del Estado y demás disposiciones legales aplicables.

Sección Tercera
Del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

Artículo 16. El Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia es un órgano interno del Sistema de Seguridad Pública del Estado, que además de las atribuciones y deberes que le impone la ley del sistema, es el responsable de implementar, supervisar y evaluar la política estatal y municipal en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.

Artículo 17. El Centro Estatal contará con un director, quién será nombrado y removido libremente por el Presidente del Consejo.

Artículo 18. El Centro Estatal tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Participar en la elaboración del Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;
- II. Elaborar su programa anual de trabajo y someterlo a la aprobación del Secretario Ejecutivo;
- III. Recabar información sobre los delitos y sus tendencias, los grupos de mayor victimización y, proyectos enfocados en la prevención y sus resultados;
- IV. Realizar diagnósticos participativos en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia;
- V. Generar mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, de los organismos públicos de derechos humanos y de las instituciones de educación superior para el diagnóstico y evaluación de las políticas públicas en materia de prevención;
- VI. Planear la ejecución de programas de prevención y las formas de evaluación, previa aprobación del Secretario Ejecutivo;
- VII. Colaborar en el diseño científico de políticas criminológicas;
- VIII. Elaborar mapas de riesgos sobre la violencia y la delincuencia en colaboración con otras autoridades sobre la base de la información recabada por el Centro Estatal, que estarán correlacionados con las condiciones sociales, económicas y educativas de las localidades;
- IX. Realizar en coordinación con otras instituciones encuestas estatales y regionales de victimización en hogares, con la periodicidad que se estime conveniente;
- X. Identificar temas prioritarios o emergentes que pongan en riesgo o que afecten directamente la seguridad pública desde la perspectiva ciudadana;
- XI. Formular recomendaciones sobre la implementación de medidas de prevención de la victimización;
- XII. Evaluar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, programas y acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia;
- XIII. Efectuar estudios comparativos de las estadísticas oficiales de criminalidad;
- XIV. Promover entre las autoridades de los gobiernos estatal y municipales, la participación ciudadana y comunitaria en las tareas de prevención social de la violencia y la delincuencia;

- XV. Garantizar el libre acceso de la población a la información estadística en materia de delito y de prevención social de la violencia y la delincuencia;
- XVI. Realizar y difundir estudios sobre las causas y factores que confluyen en el fenómeno de la criminalidad;
- XVII. Expedir los lineamientos y crear los mecanismos que sean necesarios para garantizar que las inquietudes, requerimientos y propuestas de los ciudadanos sean elevadas al Consejo Estatal;
- XVIII. Generar y recabar información sobre: a) Las causas estructurales del delito;
 - b) Estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas;
 - c) Diagnósticos sociodemográficos;
 - d) Prevención de la violencia infantil y juvenil;
 - e) Erradicación de la violencia entre grupos vulnerables; y
 - f) Modelos de atención integral a las víctimas;
- XIX. Organizar y difundir los resultados y conclusiones de las conferencias, seminarios, reuniones y demás acciones destinadas a profundizar en aspectos técnicos de experiencias sobre la prevención social de la violencia y la delincuencia;
- XX. Brindar asesoría a las autoridades de los municipios, así como a la sociedad civil, organizada o no, cuando estas así lo soliciten;
- XXI. Proponer al Secretariado Ejecutivo la celebración de convenios para la formación, capacitación, especialización y actualización de servidores públicos cuyas funciones incidan en la prevención social de la violencia y la delincuencia;
- XXII. Intercambiar y desarrollar mecanismos de aprendizaje de experiencias estatales, nacionales e internacionales;
- XXIII. Difundir la recopilación de las mejores prácticas municipales y estatales sobre prevención social de la violencia y la delincuencia, y los criterios para tal determinación;
- XXIV. Analizar las inquietudes, requerimientos y propuestas de los ciudadanos;
- XXV. Dar respuesta a las temáticas planteadas por la participación ciudadana y comunitaria; y
- XXVI. Las demás que establezca la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y demás ordenamientos aplicables.

CAPÍTULO CUARTO

DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS

Artículo 19. Los Programas estatal y municipales que incidan en la prevención social de la violencia y la delincuencia, deberán diseñarse considerando la participación interinstitucional con enfoque multidisciplinario, enfatizando la colaboración con universidades y entidades orientadas a la investigación. Asimismo, se orientarán a contrarrestar, neutralizar o disminuir los factores de riesgo y las consecuencias, daño e impacto social y comunitario de la violencia y la delincuencia.

Los programas tenderán a lograr un efecto multiplicador, fomentando la participación de las autoridades de los gobiernos estatal y municipales, organismos públicos de derechos humanos y de las organizaciones civiles, académicas y comunitarias en el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas y de la prevención social de la violencia y la delincuencia.

Artículo 20. Las políticas de prevención social deberán ser evaluadas con la participación de instituciones académicas, profesionales, especialistas en la materia y organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 21. En el cumplimiento del objeto de esta ley, las autoridades del estado y de los municipios, en el ámbito de sus atribuciones, deberán:

- I. Proporcionar información a las comunidades para enfrentar los problemas derivados de la delincuencia; siempre que no violente los principios de confidencialidad y reserva;
- II. Apoyar el intercambio de experiencias, investigación académica y aplicación práctica de conocimientos basados en evidencias;
- III. Apoyar la organización y la sistematización de experiencias exitosas en el combate a los delitos;
- IV. Compartir conocimientos, según corresponda, con investigadores, entes normativos, educadores, especialistas de otros sectores pertinentes y la sociedad en general;

- V. Repetir intervenciones exitosas, concebir nuevas iniciativas y pronosticar nuevos problemas de delincuencia y posibilidades de prevención;
- VI. Generar bases de datos especializadas que permitan administrar la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como reducir la victimización y persistencia de delitos en zonas con altos niveles de delincuencia;
- VII. Realizar estudios periódicos sobre victimización y delincuencia; e
- VIII. Impulsar la participación ciudadana y comunitaria, en la prevención social de la violencia y la delincuencia.

CAPÍTULO QUINTO

DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

Artículo 22. El Programa Estatal deberá contribuir al objetivo general de proveer a las personas protección en las áreas de libertad, seguridad y justicia, con base en objetivos precisos, claros y medibles, a través de:

- I. La incorporación de la prevención social como elemento central de las prioridades en la calidad de vida de las personas;
- II. El diagnóstico de seguridad a través del análisis sistemático de los problemas de la delincuencia, sus causas, los factores de riesgo y las consecuencias;
- III. Los diagnósticos participativos;
- IV. Los ámbitos y grupos prioritarios que deben ser atendidos;
- V. El fomento de la capacitación de los servidores públicos cuyas atribuciones se encuentren relacionadas con la materia objeto de la presente ley; lo cual incluirá la realización de seminarios, estudios e investigaciones o programas de formación entre otros, para asegurar que sus intervenciones sean apropiadas, eficientes, eficaces y sostenibles;
- VI. La movilización y construcción de una serie de acciones interinstitucionales que tengan capacidad para abordar las causas de la violencia y la delincuencia y que incluyan a la sociedad civil;
- VII. El desarrollo de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia; y

VIII. El monitoreo y evaluación continuos.

Las autoridades del estado y de los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán incluir a la prevención social de la violencia y la delincuencia en sus planes y programas.

Artículo 23. Para la ejecución del Programa Estatal, el Centro Estatal preparará un programa de trabajo anual que contenga objetivos específicos, prioridades temáticas y una lista de acciones y de medidas complementarias.

Sección Primera

De la Evaluación

Artículo 24. El Centro Estatal evaluará las acciones realizadas para ejecutar el programa anual y los resultados del año anterior. El resultado de la evaluación se remitirá al Consejo Estatal quien lo hará público en los términos que establezcan las disposiciones aplicables.

Para la evaluación de las acciones referidas en los programas, se convocará a los organismos públicos de derechos humanos, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.

Los resultados de las evaluaciones determinarán la continuidad de los programas.

Sección Segunda

De la Participación Ciudadana y Comunitaria

Artículo 25. La participación ciudadana y comunitaria, organizada o no organizada, en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, es un derecho de las personas.

Artículo 26. La participación ciudadana y comunitaria, organizada o no organizada, se hace efectiva a través de la actuación de las personas en las comunidades, en las redes vecinales, las organizaciones para la prevención social

de la violencia y la delincuencia, en los consejos de Participación Ciudadana, en el Centro Estatal o a través de cualquier otro mecanismo local o legal, creado en virtud de sus necesidades.

Artículo 27. La coordinación entre los diferentes mecanismos y espacios de participación ciudadana, tanto comunitaria como local, será un objetivo fundamental del Centro Estatal, para lo cual desarrollará lineamientos claros de participación y consulta.

CAPÍTULO SEXTO DE LAS SANCIONES

Artículo 28. El incumplimiento en el ejercicio de las obligaciones que se derivan de la presente ley será sancionado de conformidad con la ley de responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Reitero a ustedes las seguridades de mi más alta consideración.

Saltillo, Coahuila, a 01 de enero de 2012.

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**

**EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ